Imprimir

Si algo ha caracterizado a los gobiernos neoliberales en Colombia en particular, pero también en el resto de América Latina desde comienzos de la década de los años noventa, es la aplicación en contra de toda evidencia del recetario neoliberal y sus dogmas. La eliminación de los aranceles y las barreras proteccionistas se hizo sin ningún miramiento y sin ninguna etapa de transición con lo cual se arrasó la industria manufacturera que se había creado durante la fase de aplicación del modelo de sustitución de importaciones, vigente en toda la región desde finales de la década de los años cincuenta del siglo XX y hasta bien entrada la década de los años ochenta, época en que el modelo ya daba muestras de agotamiento y mostraba sus limitaciones; en todos los países se hicieron profundas reformas para permitir el modelo de internacionalización de la economía, reformas pro mercado y pro internacionalización, adecuación de la banca central con independencia de los partidos y de los gobiernos para garantizar la estabilidad monetaria y el control de la inflación; ausencia de planes y proyectos de reindustrialización pues según el dogma neoliberal el mercado es el que se encarga por sí mismo de ir moldeando y definiendo las características y los renglones económicos en que se deben especializar los distintos países y por esa vía se reprimarizó la economía regresando a un modelo económico dependiente de nuestros recursos naturales y principalmente de la minería y los hidrocarburos que son precisamente renglones que se encuentran en crisis, entre otros factores, por la crisis del modelo de desarrollo mundial dependiente de estos recursos y combustibles que son los causantes principales del calentamiento global y de la crisis ambiental.

La apertura en materia agrícola arrasó con la producción de alimentos en México pero también en Colombia y en otros países de la región, en Colombia el 30% de los granos que consumimos tienen que ser importados como el maíz, el trigo, la cebada y los frijoles, para mencionar los más significativos, cuando en el pasado estaban cubiertos por la producción nacional. Como se sabe en los países centrales pero sobre todo en la Unión Europea y en los Estados Unidos la producción agrícola está altamente subsidiada por el Estado lo que no ocurre entre nosotros. También se redujo el tamaño del Estado que abandonó toda actividad de fomento y se concentró en la regulación de servicios públicos buena parte de los cuáles fueron privatizados como la salud, una buena parte de la educación superior, la provisión de agua potable, energía eléctrica, recolección y disposición de basuras, en fin, la privatización

fue la moda que arrasó con la propiedad estatal de dichas empresas la mayoría de las cuáles fue subastada a precios irrisorios. Como lo ha demostrado Theotonio do Santos y otros autores no decreció el rol del Estado sino que cambio centralmente sus funciones que ahora se dedicó principalmente al favorecimiento del capital trasnacional y del modelo neoliberal dominante en la región. Los recursos fiscales crecieron solo que ahora se dedican principalmente al pago de intereses. [i]

Estas políticas son las que se han aplicado en Colombia desde el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) y se han profundizado durante los últimos 16 años durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). Lo han hecho con no pocas resistencias como en el resto de los países de la región por el desarrollo de importantes movimientos sociales tanto obreros como campesinos e indígenas. Solo que en Colombia como en México los partidos tradicionales y los nuevos partidos ligados al modelo se han mantenido en el poder lo cual no ocurrió en buena parte de los países de la región en donde llegaron gobiernos de centroizquierda que enmendaron algunas de las políticas más regresivas del modelo pero que no lo cuestionaron a fondo ni en materia de tributación fiscal ni en el proceso de reprimarización de sus economías. Esas fueron sus principales limitaciones y siguen siéndolo en dónde aún gobiernan como en el caso del Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, Bolivia y El Salvador.

Sin cambios de fondo

Así que ubicados en esta perspectiva los cambios y las jugadas del presidente colombiano Juan Manuel Santos se mantiene en esos ejes fundamentales del modelo y de las políticas públicas. Las movidas operadas en el Gobierno con el cambio de ministerios no significa para nada un cambio de fondo sino como lo veremos a continuación cambios en la superficie para tratar de maniobrar en contra de los sectores que cuestionan y se oponen al proceso de Paz con las Guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ya entra en su fase final con el traslado y la destrucción de las armas y la reincorporación de la guerrillerada a la vida civil y que avanza en Quito con la Mesa de Negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en que se perciben avances aún débiles en relación con

el cese al fuego que le daría credibilidad a este proceso.

Esta semana que culmina el presidente de la República cambió cuatro ministros, algunos directores de institutos descentralizados del orden nacional como el Instituto de Bienestar Familiar, en que el funcionario nombrado despertó tantas resistencias que al final no se posesionará (Juan Carlos López), cambió al director de la Unidad para las Víctimas ahora estará al frente de dicho organismo Yolanda Pinto en reemplazo de Alan Jara que pocos resultados entrega por el desfinanciamiento de dicha política; aceptó la renuncia muy lamentada del Alto Comisionado para la Paz y en buena parte el estratega por parte del Estado de las negociaciones con las FARC en La Habana y en su reemplazo nombro a Rodrigo Rivera ex ministro de defensa y ex parlamentario sin que se le conozcan mayores realizaciones en los temas de la paz ni acercamientos a esta problemática en el pasado. Rivera fue un parlamentario del Partido Liberal ligado a los sectores tradicionalistas de dicho partido como el propio presidente, Juan Manuel Santos. En términos generales Santos cambio algunas caras al frente de los ministerios pero su esfuerzo central se dirige a mantener contra viento y marea la coalición de Gobierno y busca que esa coalición se proyecte con candidato propio para las elecciones presidenciales de mayo de 2018 en que se realizará la primera vuelta presidencial. Mantiene las cuotas de seis ministerios para el Partido Liberal a quien mantiene cuotas también en otros organismos nacionales como la mencionada Unidad para las víctimas y el organismo encargado del crédito para financiamiento de la educación Superior, ICETEX; mantiene las cuotas de los conservadores al frente de los ministerios de Minas y Energía, con Germán Arce; Hacienda con Mauricio Cárdenas y el Ministerio de Justicia con Enrique Gil Botero.

Al partido Cambio Radical del candidato y exvicepresidente Germán Vargas Lleras le mantiene el Ministerio de la Vivienda así como la superintendencia de Notariado y Registro. Quizás al único partido que mantiene en entredicho es a su propio partido, el Partido de la Unidad Nacional a quien la quitó la dirección de la Financiera Territorial, Findeter, aún no ha nombrado al director del Fondo Nacional de Desarrollo, Fonade, que estaba en manos de dicho partido y aceptó la renuncia de Aurelio Irragorri, Ministro de Agricultura, pero lo mantendrá en el cargo hasta que se supere la crisis por la aparición de brotes de fiebre

aftosa en dos regiones del país.

Los movimientos de Santos buscan dos propósitos centrales en esta coyuntura. Primero que el Congreso de la República avance en la aprobación de por lo menos 20 proyectos de reformas constitucionales y legales que se requieren para avanzar en la implementación de los acuerdos de Paz. Los ajustes ministeriales y en los altos cargos del Estado buscan mediante cuotas burocráticas garantizar mayorías en el Congreso para su aprobación no exenta de reformas como ya se ha comprobado en los seis proyectos ya aprobados. Al dejar en interinidad durante un poco más de una semana al alto gobierno con todos los ministros renunciados logró que el Senado de la República expectante por los cambios burocráticos aprobara por 63 votos afirmativos y solo tres negativos el proyecto de Acto Legislativo que crea las 16 circunscripciones especiales de Paz para las regiones en que se desarrolló con mayor intensidad la confrontación armada con las FARC, en total cubren 167 municipios del país con una población de 3.5 millones de habitantes. Ahora con los nuevos nombramientos busca que esas mayorías parlamentarias se mantengan. Labor difícil pues estamos en una época de definiciones políticas de cara a las elecciones parlamentarias de marzo y presidenciales en primera vuelta el 28 de mayo del próximo año. Todo ello en medio de una insatisfacción muy grande con el gobierno que se mantiene con una aprobación en las encuestas que no supera el 24% de la opinión pública nacional. Los problemas se presentan en todos los partidos de la coalición de Gobierno. El Partido de la Unidad Nacional que es el mayoritario en el Congreso y es el partido del presidente oficialmente renunció a tener candidato propio, dada la debilidad de sus precandidatos que no lograron despegar en la opinión pública. Pero además dos de sus principales caciques enfrentan ahora una denuncia de la Fiscalía que pidió a la Corte Suprema de Justicia que los investigue por corrupción en el sonado caso de Odebrecht, nos referimos a Bernardo Miguel Elías, popularmente conocido como el ñoño Elías y el senador Musa Abraham Besayle Fayad, que son los dos senadores del Partido de la U con mayor caudal electoral, entre los dos sumaron en las elecciones de 2014 cerca de 300 mil votos. Santos busca desmarcarse de estos escándalos lo cual repercutirá en su comportamiento en el Congreso, por lo pronto, mientras se resuelve su suerte en la Corte Suprema de Justicia. Difícilmente mantendrán su respaldo a un Gobierno que no los apoya. Esto seguramente repercutirá en la fragmentación de dicho partido y también en el

debilitamiento del Gobierno en el Congreso de la República.

El Partido Conservador mantiene una división desde hace ya muchos años. Dos sectores se disputan el liderazgo. Un sector amigo del Uribismo encabezado por Martha Lucía Ramírez quien en contra de los barones electorales y apoyada en las bases conservadoras logró imponerse en el año 2014 logrando su nominación a la primera vuelta presidencial en la que obtuvo un poco más de dos millones de votos y ella en la segunda vuelta apostó por el candidato del Uribismo, Oscar Iván Zuluaga. El sector clientelista mayoritario en su fracción parlamentaria apoyó a Santos en la reelección como lo había apoyado ya en el año 2010 y ha sido el principal beneficiado con las cuotas burocráticas como también lo fue en los dos gobiernos de Uribe. Ahora este sector clientelista tradicional no cuenta con una figura que enfrente la precandidatura de Martha Lucia Ramírez quien ya anunció que se presentará al mecanismo de selección que defina dicho partido. Así que allí no hay certezas aún de lo que pueda pasar y ello puede afectar también el apoyo de sus parlamentarios al Gobierno en el Congreso. Santos buscó atornillarlos al Gobierno manteniéndoles las cuotas burocráticas.

También en Cambio Radical el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras se presentan dudas y problemas y esto nos traslada al segundo propósito que tienen las recientes movidas políticas de Santos, nos referimos al tema de las candidaturas presidenciales. Santos mantiene el juego abierto en torno a dos posibilidades. Mantiene a Vargas Lleras con el Gobierno. Vargas Lleras es el candidato mejor posicionado en las encuestas del espectro de la coalición. Las dudas de Santos se refieren al silencio y a las críticas de Vargas Lleras al proceso de paz con las FARC-EP. En la medida en que se producen dos fenómenos simultáneos en la opinión pública, la caída en la imagen positiva de Uribe en las más recientes encuestas Uribe tiene una imagen negativa del 58% y positiva del 40% y el proceso de paz con las FARC ha venido ganando terreno y hoy se encuentra con una aceptación favorable de más del 60% de los encuestados. Esto hará que las posiciones de Vargas Lleras sobre el proceso de paz se puedan matizar con lo cual sus posibilidades de cercanía con el Gobierno aumentan y también sus probabilidades de alzarse con la candidatura de la coalición y eso es por lo que está apostando Santos.

El otro sector al que juega Santos es el del liberalismo pues en este partido podría apostar el exjefe negociador del Acuerdo con las FARC-EP, Humberto de la Calle, el problema es que no despega en las encuestas y por encima de él en las encuestas se ubica Juan Manuel Galán aunque ambos están lejos de los punteros que hoy por hoy son Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Claudia López, seguidos de Sergio Fajardo y Clara López. En últimas de la Calle tendrá que resolver si mantiene sus aspiraciones dentro del Partido Liberal lo cual parece ser un lastre y no parece representarle un fuerte respaldo ciudadano. Esas son las apuestas de Santos en esta coyuntura y esas son, a mi juicio, las razones de sus más recientes jugadas.

PEDRO SANTANA RODRÍGUEZ: Director Revista Sur

Bogotá agosto 3 de 2017.

NOTAS

[i] “Esta tesis (la de la disminución del rol del Estado) entra en choque con gran parte del debate que se daba equivocadamente en nuestros países sobre la cuestión del déficit público. No se trata de una disminución del rol del Estado. Por el contrario, como lo demostramos con datos indiscutibles, el gasto público ha aumentado dramáticamente en todo el siglo XX e incluso en el período neoliberal. Lo que cambió fue el carácter del mismo que se degeneró en una actividad totalmente regresiva: el pago de intereses”. Theotonio Dos Santos, Caja de Herramientas. No 99, mayo de 2004, Bogotá.